

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado de Letras de Punta Arenas
CAUSA ROL : C-1814-2020
CARATULADO : NAVARRO/BENAVIDES

Punta Arenas, veinte de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Que, en el folio 6, del cuaderno de excepciones, en cumplimiento a lo ordenado en razón de haberse acogido las excepciones dilatorias, don Juan José Claudio Arcos Srdanovic, abogado, domiciliado en calle Señoret número 230 de la ciudad de Punta Arenas, en representación de don Teobaldo José Germán Santana Vidal, conductor, chileno, casado, domiciliado en calle Francisco Roux número 60, Punta Arenas, don René Orlando Balcazar Oyarzo, chileno, casado, domiciliado en Pasaje Málaga número 90, Villas los Españoles, Punta Arenas, don Alejandro Antonio Yalef Aro, chileno, casado, domiciliado en calle el Ficus número 1285, Rancagua, y don Mario Enrique Navarro Gómez, chileno, casado, domiciliado en la Heras 414, Punta Arenas, interpone demanda en juicio de hacienda por indemnización de daños y perjuicios, derivados de responsabilidad extracontractual, en contra del Estado de Chile, representado legalmente por el Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Magallanes, don Claudio Patricio Benavides Castillo, ambos domiciliados en la calle 21 de Mayo N°1678, de la ciudad de Punta Arenas, o quien legalmente lo subrogue.

Pide al tribunal, tener por interpuesta demanda en juicio de hacienda por indemnización de daños y perjuicios derivados de responsabilidad extracontractual, en contra del Estado de Chile, representado legalmente por el Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Magallanes, don Claudio Patricio Benavides Castillo, ya individualizados, y ordenar que se condene a la demandada a pagar la suma de \$200.000.000 a cada uno de los demandantes, o lo que se estime pertinente por concepto de daño moral en favor de los demandantes, más el reajuste y el máximo de interés legal a partir de la fecha de interposición de la demanda, con costas, o a pagar la suma que se estime pertinente y por los conceptos que se estimen pertinentes.

Incorpora los siguientes relatos de los hechos:

TEOBALDO JOSÉ GERMÁN SANTANA VIDAL.

Señala que es oriundo de Punta Arenas donde nació el 04 de agosto del año 1966, que el día 27 de marzo de 1984, participó en una jornada de protesta por los derechos humanos en el centro de la ciudad. En aquella oportunidad, sin provocación alguna iba caminando por el sector del río de las minas con dos amigos más, en ese



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWXZXFHWSSJ

instante llega una micro de Carabineros y proceden a detenerlos por una “supuesta sospecha de robo”.

Indica que al subir a dicha micro su representado y sus amigos, los pasearon por casi toda la ciudad llevándolos a la Comisaría, quedó incomunicado, comunicándole que el nuevo cargo que se le imputaba, era por haber rayado todo el barrio Prat. Al día siguiente lo comenzaron a interrogar tratando de sacar información de la que no tenía conocimiento. Mientras todo esto sucedía la vicaría de la solidaridad hacía lo pertinente para poder sacarlo de ahí.

Agrega que al estar detenido apareció gente de la CNI vendándole los ojos y golpeándolos brutalmente en todo el cuerpo.

Menciona que al “recuperar la libertad”, luego de dos días, el asunto no quedó allí. Lo vivido en dicha cárcel es imborrable y lo persigue hasta el día de hoy; ya que por un lado siente la frustración de sentirse discriminado y marcado de por vida, con un rencor por las tortura vivida el cual no lo deja vivir en paz y por otro lado hasta el día hoy le cuesta salir tranquilo a la calle, ya que se siente que sigue siendo vigilado.

RENE ORLANDO BALCAZAR OYARZO

Indica que el día 27 de marzo de 1984, participó en una jornada de protesta por los derechos humanos en el centro de la ciudad. En aquella oportunidad, sin provocación alguna, mientras caminaba en una marcha en que había unas 2000 personas, y que se desarrollaba por la calle Borjes, fue llevado en contra de su voluntad a la Primera Comisaría de Punta Arenas junto a los otros detenidos en donde había un hacinamiento a tal punto que hasta en los pasillos había personas.

Dice que, al llegar la noche, comenzaron a sacar grupos de los calabozos, y en uno de esos grupos se encontraba él, en ese momento temió por su vida puesto que es de conocimiento público que muchos detenidos jamás volvieron. Esa noche llegaron unas personas de civil y lo hicieron arrodillarse frente a una pared, mientras lo golpeaban por la espalda sin detenerse. Al día siguiente es trasladado a la Fiscalía Militar instancia en donde estuvo en todo momento presionado por cada uno de los funcionarios presentes, quienes lo apuntaban con fusiles. Es en dicha situación el Fiscal lo obligó a firmar documentos, sin tener la alternativa de leerlos y/u objetarlos, ni siquiera de consultar su contenido, ya que su vida estaba en juego.

Señala que en ese momento se encontraba en un estado de desolación y miedo por todas las amenazas constantes de muerte, además de que, en la Fiscalía Militar, pusieron arriba del escritorio unas piedras, y le indicaron que esas eran las que había “supuestamente” arrojado. Posteriormente fue trasladado a la cárcel en espera de la decisión del fiscal, la cual tardaba cinco días en estar lista.

Agrega que como era de esperar con los antecedentes que pusieron en sus declaraciones, los cuales por cierto eran falsos sirvieron para declararlo culpable, y fue así que comenzó su calvario. Afirma que los daños psicológicos son tremendos,



cambiaron su vida para siempre. Acaba de terminar sus estudios por ende se vio afectado económicamente además de sus pretensiones laborales. Estuvo privado de libertad durante 25 días y la estadía en la cárcel pública fue en condiciones de hacinamiento (6 personas mínimo en una celda para dos), miedo, de lo que podría pasar, que en cualquier momento podría ser asesinado, toda vez que era de público conocimiento las prácticas del personal armado frente a quienes políticamente eran de izquierda. No sólo lo anterior, sino que estuvo privado de alimentación razonable, ya que las porciones de comida eran insuficientes, con las luces apagadas las 24 horas, y con visitas de personal militar aleatorias para retirar prisioneros, sin certeza de que vuelvan al recinto carcelario; sin olvidar las condiciones higiénicas deficientes que se producen en presos hacinados, que destacan especialmente en el espacio reducido.

Expresa que lo vivido en dicha cárcel es imborrable, lo persigue hasta el día de hoy; ya que por un lado siente la frustración de sentirse discriminado y marcado de por vida, con un rencor por las torturas vividas el cual no lo deja vivir en paz y por otro lado hasta el día hoy le cuesta salir tranquilo a la calle, ya que siente que sigue siendo vigilado. Menciona que fue perseguido durante 6 años, lo cuales marcaron su vida para siempre.

ALEJANDRO ANTONIO YALEF AROS

Expone que el día 27 de marzo de 1984, participó en una jornada de protesta por los derechos humanos en el centro de la ciudad. En aquella oportunidad, caminaba en una marcha en que había unas 2000 personas, y que se desarrollaba por la calle Bories en contra de la dictadura. Se apersonan Carabineros y Militares, lo detuvieron en la esquina de calle Bories con Colón, lo subieron a un micro tirándolo literalmente al piso, golpeándolo sin razón alguna, tanto a los hombres y a las mujeres detenidas los tocaban y particularmente ellas eran abusadas sexualmente, recuerda que todo esto sucedió en un micro verde de Carabineros.

Indica que dentro de la micro siguen golpeándolo con puños y pies por parte de Carabineros, alrededor de las 10 de la noche lo bajan en Waldo Seguel y lo trasladan caminando hacia la Comisaría, al llegar a esta proceden a quitarles los cinturones y cordones de los zapatos, como ya es conocido lo recibieron en el “callejón” donde debían pasar mientras los Carabineros proporcionaban golpes. Ya pasando por aquel callejón de Carabineros, es posicionado de frente a la pared con los brazos arriba y las piernas cruzadas, todo esto duró aproximadamente una hora, hasta que los llevaron al calabozo, ese día habían detenidos alrededor de 90 personas y casi todas estaban en aquel calabozo, después de unas horas comenzó a correr el agua por las paredes por la transpiración y hacinamiento, se turnaban para poder respirar colocando la nariz en una ventanilla que había en la puerta, estaba don Clemente Gálvez quien se desmayó.



Agrega que en ese momento todos los detenidos comenzaron a gritar para poder sacar a este señor desmayado, y viene el Carabinero de turno el cual procede a retirar a don Clemente, y es ahí que solicitaron ir al baño, accedieron luego de hacerlos esperar bastante rato, en eso que van al baño en grupos de 5 personas comienzan nuevamente los insultos y golpes, inclusive los querían obligar a tomar agua del inodoro. Al día siguiente es sacado del calabozo en un grupo de 10 personas, les entregan los cordones de los zapatos a lo que procede a colocar dichos cordones en eso viene un Carabinero y le da una patada en el estómago insultándolo y diciendo te vas a la cárcel.

Expresa que como era de esperar con los antecedentes que pusieron en sus declaraciones, los cuales por cierto eran falsos sirvieron para declararlo culpable, y fue así que comenzó su calvario. Los daños psicológicos son tremendos, cambiaron su vida para siempre, todas estas actuaciones eran en la noche para evitar ser visto por la gente. Estuvo privado de libertad durante 25 días y la estadía en la cárcel pública fue en condiciones de hacinamiento (9 a 10 personas mínimo en una celda para dos), miedo, de lo que podría pasar, que en cualquier momento podría ser asesinado, toda vez que era de público conocimiento las prácticas del personal armado frente a quienes políticamente eran de izquierda. No sólo lo anterior, sino que estuvo privado de alimentación razonable, ya que las porciones de comida eran insuficientes, con las luces apagadas las 24 horas, y con visitas de personal militar aleatorias para retirar prisioneros, sin certeza de que vuelvan al recinto carcelario. Indica que no debemos olvidar las condiciones higiénicas deficientes que se producen en presos hacinados, que destacan especialmente en el espacio reducido.

Indica que tras llevarlo por una tercera vez a la Fiscalía lo hicieron nuevamente firmar papeles que jamás fueron leídos amedrentándolo con matarlo, volvieron a trasladarlo a la cárcel y a eso de la 01:00 horas pudo “recuperar su libertad”, el asunto no quedó allí. Lo vivido en dicha cárcel es imborrable. Y persigue al demandante hasta el día de hoy; ya que por un lado siente la frustración de sentirse discriminado y marcado de por vida, con un rencor por las torturas vividas el cual no lo deja vivir en paz y por otro lado hasta el día hoy le cuesta salir tranquilo a la calle, ya que siente que sigue siendo vigilado. Menciona que su representado tuvo mucha dificultad para ser aceptado en trabajos por los antecedentes que posee.

MARIO ENRIQUE NAVARRO GOMEZ

Señala que el día 27 de marzo de 1984, participó en una jornada de protesta por los derechos humanos en el centro de la ciudad. En aquella oportunidad, sin provocación alguna, caminaba en una marcha en que había unas 2000 personas, y que se desarrollaba por la calle Bories con Colón, y en esas circunstancias fue detenido por Carabineros en el sector de Colón con Chiloé, quienes le propinaron golpes mientras era trasladado a la Comisaría.



Una vez en la comisaría le daban la “bienvenida” la cual consistía en pasar por un callejón con Carabineros en ambos lados, para así propinarles golpes de todo tipo. Posteriormente es ingresado a una celda en donde se encontraban entre 60 o 70 personas hacinadas con movimiento totalmente reducido, debió dormir de pie y la respiración era casi nula, se turnaban entre los detenidos para tener un poco de oxígeno por la puerta de dicha celda.

Al día siguiente es trasladado al “palacio de la risa” en donde es torturado brutalmente, siendo amarrado y golpeado con el objeto de que reconociera hechos imputados a él, los cuales por lo demás eran falsos, llegaron a tal punto que le pusieron corriente en los testículos.

Relata que una vez en Fiscalía Militar instancia en donde estuvo en todo momento presionado por cada uno de los funcionarios presentes, quienes lo apuntaban con fusiles, el Fiscal lo obligó a firmar documentos, sin tener la alternativa de leerlos y/u objetarlos, ni siquiera de consultar su contenido, ya que su vida estaba en juego. Dice que en ese momento se encontraba en un estado de desolación y miedo por todas las amenazas constantes de muerte, y además de amenazarlo con lo más importante que era su familia.

Agrega que como era de esperar con los antecedentes que pusieron en sus declaraciones, los cuales por cierto eran falsos sirvieron para declararlo culpable, y fue así que comenzó su calvario. Los daños psicológicos son tremendos, cambiaron su vida para siempre vio mermada su vida profesional, económicamente se le dificultó el poder entrar a la vida laboral.

Dice que estuvo privado de libertad durante 33 días y la estadía en la cárcel pública fue en condiciones de hacinamiento (6 personas mínimo en una celda para dos), miedo, de lo que podría pasar, que en cualquier momento podría ser asesinado, toda vez que era de público conocimiento las prácticas del personal armado frente a quienes políticamente eran de izquierda. No sólo lo anterior, sino que estuvo privado de alimentación razonable, ya que las porciones de comida eran insuficientes, con las luces apagadas las 24 horas, y con visitas de personal militar aleatorias para retirar prisioneros, sin certeza de que vuelvan al recinto carcelario. Indica que no debemos olvidar las condiciones higiénicas deficientes que se producen en presos hacinados, que destacan especialmente en el espacio reducido.

Señala que tras “recuperar la libertad”, el asunto no quedó allí. Durante 7 años estuvieron hostigándolo, entraban en la noche a su hogar para colocar panfletos y amenazarlo. Lo vivido en dicha cárcel es imborrable y persigue al demandante hasta el día de hoy; ya que por un lado siente la frustración de sentirse discriminado y marcado de por vida, con un rencor por las torturas vividas el cual no lo deja vivir en paz y por otro lado hasta el día hoy le cuesta salir tranquilo a la calle, ya que siente que sigue siendo vigilado.



Destaca que no resulta fácil recordar todo lo vivido, ya que, producto de la tortura física y psíquica hasta el día de hoy tiene lapsos de pérdida de memoria.

Que, en el folio 14, la demandada contestó la demanda.

Que, en el folio 16, la parte demandante evacuó la réplica.

Que, en el folio 18, la demandada evacuó la dúplica.

Que, en el folio 21, se recibió la causa a prueba.

Que, en el folio 68, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

La Constitución Política de la República. Que, como señala el profesor Carlos Nino, refiriéndose a Hart, la Constitución es posible verla como el conjunto de prácticas de reconocimiento del derecho de una sociedad –es decir, no sólo opera como un evento que se origina por una convención social, sino que representa una práctica social continua-.

Así, es posible observar a la Constitución Política de la República como un instrumento que sirve para resolver problemas de coordinación, como ocurre en el presente caso, en el cual por una parte se demanda la indemnización de perjuicios a causa de un hecho dañoso, y por otro, la existencia de la institución de prescripción –vigente en nuestro orden jurídico- lo que da certeza a sus ciudadanos –y no sólo a ellos pero a ellos principalmente- no sólo sobre la exigibilidad sino también de la oportunidad de tal exigibilidad.

Sostiene lo anterior, lo dispuesto en el artículo 5° de nuestra Carta Fundamental, el que mandata la incorporación de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Conviene tener presente para efectos de consideraciones previas, que el sujeto, la persona humana, se ha erigido como el centro de generación del derecho, de manera tal que son sus intereses el principal objeto de protección de parte importante de las normas jurídicas.

Como se viene reflexionando y considerando la relevancia en el proceso de construcción de normas, y específicamente de lo que debemos entender por derecho vigente, el Máximo Tribunal ha transitado en lo que respecta a dar lugar a la reparación civil por responsabilidad del Estado en violaciones a los derechos humanos, decidiendo de esta manera preterir la prescripción establecida para casos que no operan como éste, en el extremo, y hoy en día parece estar conteste en la necesidad de dar lugar con determinados matices.

Por su parte, el acceso a la justicia en su amplia dimensión y reparación integral a las víctimas. Ha sido, en nuestra región, la Corte IDH la que ha relevado la importancia de estos derechos, convirtiéndolo en un elemento central de nuestros ordenamientos jurídicos, ampliando su entendimiento –respecto de acceso a la justicia- no sólo a exigencias adjetivas sino a su sentido material, todo en el marco de lo que entendemos, es un Estado de Derecho.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWXZXFHWSSJ

Obliga lo anterior, que frente a la interpretación de normas, el sentenciador debe optar por aquella que haga efectivo los derechos y garantías de los ciudadanos, que efectivamente constituya un acceso a la justicia en su amplia dimensión. Así las cosas, y como lo ha señalado esta Corte internacional, “el acceso a la justicia constituye una norma imperativa de Derecho Internacional y, como tal, genera obligaciones erga omnes para los Estados de adoptar las medidas que sean necesarias para no dejar en la impunidad esas violaciones...” por una parte, y por otra, pone acento en la víctima, como un actor central en el derecho internacional de los derechos humanos. Por su parte, la reparación integral comprende la investigación; restitución de derechos, bienes y libertades; la rehabilitación física, psicológica o social; la satisfacción de la víctima; las garantías de no repetición; y las indemnizaciones compensatorias por daños materiales e inmateriales.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en el folio 6, del cuaderno de excepciones, en cumplimiento a lo ordenado en razón de haberse acogido las excepciones dilatorias, don Juan José Claudio Arcos Srdanovic, abogado, domiciliado en representación de don Teobaldo José Germán Santana Vidal, don Rene Orlando Balcazar Oyarzo, don Alejandro Antonio Yalef Aro y don Mario Enrique Navarro Gomez, interpone demanda en juicio de Hacienda por indemnización de daños y perjuicios, derivados de responsabilidad extracontractual, en contra del Estado de Chile, representado legalmente por el Abogado Procurador Fiscal del Consejo de Defensa del Estado de Magallanes, don Claudio Patricio Benavides Castillo, o quien lo subrogue, por las razones de hecho y derecho señaladas en la parte expositiva, las que se dan por expresamente reproducidas por economía procesal.

Pide la suma de \$200.000.000 (doscientos millones de pesos), para cada uno de los demandantes, o lo que el Tribunal determine, básicamente fundado en las violaciones a los derechos humanos de los actores en distintos periodos comprendidos en la época de la última Dictadura Militar de nuestro país, a partir de 1973.

SEGUNDO: Que, en el folio 14, la demandada contestó la demanda, solicitando su total rechazo en base a las defensas y alegaciones que expone.

La parte demandada, esto es, el Fisco de Chile, no controvierte los hechos en lo medular, indicando que los demandantes ya han sido indemnizados.

El Fisco de Chile solicita el rechazo de la demanda, básicamente por estimar la prescripción de la acción por un lado, así como por otro, por estar en todo caso ya indemnizados en sus perjuicios las víctimas, al ser parte de un programa estatal de reparación, recibiendo los beneficios que diversas leyes de reparación han establecido en su favor, como lo reconoce en la demanda, a consecuencia del reconocimiento que se les hace por la Comisión Nacional sobre prisión y tortura, creada por el D.S. N° 1040 de 2003, del Ministerio del Interior, señalando en subsidio, que el monto



debe en todo caso ser muy inferior al demandado, toda vez que se explicitan los montos que el Estado ha desembolsado en diversas formas de reparación.

TERCERO: Que en el folio 16, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, dando por expresamente reproducidos los términos de la demanda.

Señala que la contraparte no ha contradicho sustancialmente que estemos frente a una persona que tiene el carácter de víctima de derechos humanos, por haber padecido prisión política y tortura, como tampoco que han sido agentes del Estado de Chile, quienes han cometido estas violaciones a los DD.HH.

De esta forma los artículos 2 y 3 del Convenio de Ginebra de 1949, 1, 2 y 63.1 del Pacto de San José de Costa Rica; 1, 5, 6, 7, 19 N° 1- 7, y siguientes, de La Constitución Política de La República de Chile; artículo 1 de la ley 20.357; artículos 2314-2029 del Código Civil; y artículos 748 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, son plenamente atingentes al caso de marras.

Afirma que los daños no han sido reparados, la situación Jurídica en que los pone el Consejo de Defensa del Estado, es similar a la que por ejemplo los pone la legislación del trabajo, donde el estado, consciente de los riesgos y daños a los que están expuestos los trabajadores, crea una institucionalidad a través del decreto ley 3500, con el fin de que los trabajadores no queden ante una situación de vulnerabilidad cuando tienen un accidente laboral, pero que en ningún caso constituye una indemnización económica, cuando el accidente se debe a la responsabilidad del empleador.

Dice que este planteamiento Jurídico no ha sido acogido, e incluso ha sido rebatido por el Propio Estado de Chile.

Sobre este particular, menciona que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado específicamente sobre esta Materia Debate.

En efecto, en el caso **ÓRDENES GUERRA Y OTROS VS. CHILE** mediante **SENTENCIA DE** fecha 29 DE NOVIEMBRE DE 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas), la Excelentísima Corte Interamericana de Derechos Humanos conoció de un asunto de similares características al presente litigio. En efecto, María Laura Órdenes Guerra y otros ciudadanos chilenos interpusieron acción en contra de la República de Chile sometiéndose a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte.

Expresa que al momento de Contestar la denuncia, el Estado de Chile manifestó que “acepta los hechos que se han tenido por probados por la [...] Comisión en el Capítulo IV de su Informe. [...] Se hace presente que esta aceptación del marco fáctico del caso versa únicamente en torno a los procesos judiciales iniciados a fin de obtener una reparación civil por parte de las presuntas víctimas en este caso y, por tanto, queda fuera de esta declaración cualquier denuncia adicional referida a la investigación penal de los hechos ocurridos durante la dictadura militar”.



Además, el Estado señaló que, “con el propósito de encontrar soluciones justas a los problemas particulares del presente caso, [...] considera importante pronunciarse específicamente sobre la aceptación de los siguientes hechos: Las personas que fueron detenidas, secuestradas y/o desaparecidas y ejecutadas por agentes del Estado durante la dictadura militar en los años 1973 y 1974, que aparecen mencionadas en el Informe de Fondo de la CIDH, forman parte de la nómina de víctimas de violaciones a derechos humanos reconocidas por el Estado de Chile en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig), del 8 de febrero de 1991. [...] Los familiares de las víctimas reconocidas por el Estado y mencionadas en el Informe [...] no han recibido una reparación económica por la vía judicial. No obstante, la mayoría de ellos han recibido diferentes beneficios administrativos y otras bonificaciones amparados en cuerpos legales dictados como parte de la política de reparaciones llevada a cabo por el Estado una vez reestablecida la democracia.

Dice que precisamente en este orden ideas, es el propio Estado de Chile, el que en otra sede, ha reconocido, que en Chile las víctimas de DDHH no han recibido una reparación económica por la vía judicial y que lo que han recibido son diferentes beneficios administrativos y otras bonificaciones amparados en cuerpos legales dictados como parte de la política de reparaciones llevada a cabo por el Estado una vez reestablecida la democracia, pero que en ningún caso tienen el carácter de indemnización lo que se refiere esta demanda.

Sobre el punto específico de la reparación efectiva, en el referido proceso el Estado de Chile señaló que “en cuanto a la naturaleza de las medidas de reparación a ser adoptadas por [la] Corte, tomando en cuenta su competencia amplia contenida en el artículo 63.1 de la CADH, el Estado es de la opinión que, dado que la presente causa se origina por la imposibilidad de que un tribunal interno conociera el fondo de una acción cuya naturaleza es indemnizatoria de perjuicios, la reparación adecuada tendiente a hacer desaparecer los efectos de -8- la violación cometida correspondería principalmente en la determinación de una indemnización monetaria”, con lo que queda cerrada toda posibilidad, que los actos unilaterales de reparación que ha realizado el Estado de Chile, puedan ser considerados en Derecho como Parte del Pago de una indemnización de Perjuicios.

Indica que la acción no está prescrita y que esta alegación no es pertinente en cuanto estamos en presencia de violaciones a los derechos humanos.

Así pues el día 17 de mayo de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió el caso María Laura Órdenes Guerra y otros respecto de la República de Chile (en adelante “el Estado”, o “Chile”) a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la Convención Americana y el artículo 35 del Reglamento de la Corte. Según la Comisión, el caso se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las



garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción a acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización por perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999 y 2003, por juzgados, tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción.

Agrega que, en definitiva, el fallo de la Excma. Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en su parte resolutive lo siguiente:

“LA CORTE DECIDE, Por unanimidad:

1. Aceptar el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, en los términos de los párrafos 23 a 31 de esta Sentencia. DECLARA, Por unanimidad, que:

2. El Estado es responsable por la violación del derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de María Laura Órdenes Guerra, Ariel Luis Antonio Alcayaga Órdenes, Marta Elizabeth Alcayaga Órdenes, Augusto Oscar Amador Alcayaga Órdenes, Gloria Laura Astris Alcayaga Órdenes y María Laura Elena Alcayaga Órdenes; de Lucía Morales Compagnon, Jorge Roberto Osorio Morales, Carolina Andrea Osorio Morales, Lucía Odette Osorio Morales y María Teresa Osorio Morales; de Alina María Barraza Codoceo, Eduardo Patricio Cortés Barraza, Marcia Alejandra Cortés Barraza, Patricia Auristela Cortés Barraza, Nora Isabel Cortés Barraza y Hernán Alejandro Cortés Barraza; de Mario Melo Acuña, Iliá María Prádenas Pérez y Carlos Gustavo Melo Prádenas; de Pamela Adriana Vivando Medina; de Elena Alejandrina Gómez Vargas y Katia Ximena Espejo Gómez; y de Magdalena Mercedes Navarrete Faraldo, Jorge Alberto Reyes Navarrete, Patricio Hernán Reyes Navarrete y Víctor Eduardo Reyes Navarrete, en los términos de los párrafos 76 a 102 de esta Sentencia. Y DISPONE, Por unanimidad, que:

3. Esta Sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWXZXFHWSSJ

4. *El Estado debe pagar las cantidades fijadas en los párrafos 124 y 140 de la presente Sentencia por concepto de indemnizaciones compensatorias, así como por el reintegro de gastos, en los términos de los referidos párrafos y de los párrafos 141 a 147 del presente Fallo.*

5. *El Estado debe realizar las publicaciones que se indican en el párrafo 125 del presente Fallo, en los términos de ese mismo párrafo.*

6. *El Estado debe rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la presente Sentencia, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la misma, y además debe presentar un informe, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la misma, en el cual indique –para cada una de las medidas de reparación ordenadas– cuáles son los órganos, instituciones o autoridades estatales encargadas o responsables de implementarlas, que incluya un cronograma de trabajo para su cumplimiento total.*

7. *La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Juez Humberto Antonio Sierra Porto hizo conocer a la Corte su voto concurrente, el cual acompaña esta Sentencia. Redactada en español en San José, Costa Rica, el 29 de noviembre de 2018”.*

Cita otros fallos: Rol N° 31-2018. Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, caratulada “Provoste con Fisco de Chile”; también SCS Nros. 20.288-14, de 13 de abril de 2015; 1.424, de 1 de abril de 2014; 22.652, de 31 de marzo de 2015, entre otras; Rol 11.767- 2017, Excma. Corte Suprema; Sentencia de fecha 25 de Febrero de 2019 de la Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 29251- 2018, caratulada “CORTES con FISCO DE CHILE”.

Afirma que es improcedente la compensación, esto no concuerda con lo reconocido por el Propio Estado de Chile en proceso citado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se reconoce que el Estado de Chile no ha resarcido por vía judicial los perjuicios ocasionados a las personas.

Agrega que sobre este punto, cita los argumentos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, que ante idénticas alegaciones, en la causa rol 31- 2018 estableció que:

“3º.- Que en relación a las excepciones planteadas por el Fisco de Chile, consistentes en una presunta reparación satisfactoria que habrían recibido los actores cabe tener presente que si bien la ley N°. 19.992 estableció una pensión para las víctimas de violaciones de derechos humanos, entre los cuales se encuentran los demandantes, debe señalarse que aquellos beneficios en ningún caso han constituido una real reparación del daño ocasionado.



Los beneficios y pagos otorgados por la norma señalada dice relación con aportes económicos que de alguna manera han satisfecho la mantención, educación y salud de quienes se han visto favorecidos por tales beneficios, pero jamás, han podido suplir el dolor y las secuelas que ocasiona ser sometido a tortura y a los diversos vejámenes a los que estuvieron expuestos los demandantes mientras fueron prisioneros de agentes del Estado. En definitiva, aquellas resultan ser reparaciones simplemente simbólicas.

4° Que, por otra parte la reglamentación invocada por el Fisco -que sólo establece un sistema de pensiones asistenciales- no contempla incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen y no es procedente suponer que ella se dictó para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata de formas distintas de reparación, y que las asuma el Estado voluntariamente, como es el caso de la legislación antes señalada, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que autoriza la ley.

5°.- Que por lo anterior, resulta atendible acceder a la indemnización por el daño moral ocasionado a los demandantes y en cuanto a su evaluación si bien la doctrina y jurisprudencia mayoritarias han expresado que atendida la naturaleza subjetiva que lo caracteriza resulta imposible fijar una cantidad de dinero a título de reparación de daño moral, existen razones de justicia y equidad que obligan a su reparación y regulación prudencial por parte del juez, atendidas las condiciones y características personales de la víctima y las circunstancias de producción y magnitud del daño sufrido por esta, y en todo caso teniendo presente que la indemnización no puede transformarse en una fuente de lucro para víctima.

6° Que reconociendo desde luego las falencias y dificultades para regular un dolor como el descrito, y advirtiendo que los actores reclaman el daño como dolor propiamente tal, el padecimiento físico en su oportunidad y el dolor de las secuelas físicas, así como también, y quizás en mayor medida el dolor espiritual y afecciones psicológicas y emocionales al verse privados injusta, ilegítima e ilegalmente de libertad, para determinar el quantum indemnizatorio, estos sentenciadores tendrán en consideración la gravedad de las violaciones a los derechos humanos a que fueron sometidos los actores, y el periodo por el cual se extendió dicho apremio ilegítimo, las aflicciones padecidas, así como las secuelas físicas y psicológicas que llevaron a que fueran reconocidos como víctimas del Estado Chileno en el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura ”

Así pues, la demandante solicita, que tal como el Propio Estado de Chile lo consignó en el proceso ya referido seguido ante la comisión de Derechos Humanos, y como lo ha resuelto la ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, ya referido, se desestimen las alegaciones de la contraria con costas.



CUARTO: Que en el folio 18, la demandada evacúo el trámite de la réplica, señalando que reproduce íntegramente y ratifica en su totalidad el escrito de contestación de la demanda de fecha 16 de diciembre de 2020, por lo que se reitera todas y cada una de las alegaciones, excepciones y defensas contenidas en dicho escrito, solicitando rechazar la demanda interpuesta en todas sus partes.

Sin perjuicio de lo anterior, y en relación con lo manifestado en el escrito de réplica señala que en relación a la excepción de reparación integral opuesta, reitera lo señalado en la contestación de la demanda, en cuanto a que el daño moral ya ha sido indemnizado, por lo que procede se haga lugar a la excepción alegada. Insiste respecto al marco general de las reparaciones ya otorgadas, al esfuerzo que ha realizado el Estado de Chile para compensar el daño producido a las víctimas, y en especial, respecto a las reparaciones percibidas por los demandantes cónyuges, madres e hijos de las víctimas, ya sea en forma de transferencias directas en dinero, mediante la asignación de nuevos derechos sobre prestaciones estatales específicas y mediante el conjunto de reparaciones simbólicas mencionadas en la contestación.

Indica que en relación a la prescripción de la acción deducida en este juicio, se reitera la importancia de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el Pleno de la Excma. Corte Suprema con fecha 21 de enero de 2013 en los autos rol 10.665-2011 *“Episodio Colegio Médico-Eduardo González Galeno”* y que la defensa transcribió en sus principales argumentos, en el escrito de contestación a la demanda.

En dicho fallo se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual en contra del Estado prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme a lo dispuesto en el artículo 2332 del Código 22 Civil.

En efecto, desde hace más de 10 años la Excma. Corte ha señalado reiteradamente que en esta materia se aplica el artículo 2332 del Código Civil que dispone un plazo de cuatro años en la cual prescribe la acción por responsabilidad extracontractual en contra del Estado. Que la aplicación de esta norma está regulada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal, que señala expresamente que las normas de prescripción se aplican “a favor y en contra del Estado”.

Agrega que también la Excma. Corte ha dejado claramente establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, específicamente las normas sobre prescripción de la acción civil. En el fallo dictado por el Pleno de la Excma. Corte queda ampliamente establecido que ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tampoco la Convención de Ginebra contienen normas que declaren imprescriptible la acción civil o impidan a cada Estado aplicar su legislación interna sobre la materia.

Destaca y cita la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema, con fecha 16 de marzo de 2016, respecto a la excepción de pago y de prescripción.



Finalmente, hace presente que el demandante Sr. Santana ha recibido la suma total de \$19.684.528.- y que mantiene, además, una pensión mensual denominada “Valech” de \$189.552.-; el Sr. Balcazar ha recibido la suma total de \$19.684.528.- y que mantiene, además, una pensión mensual denominada “Valech” de \$189.552.-; el Sr. Yalef ha recibido la suma total de \$19.684.528.- y que mantiene, además, una pensión mensual denominada “Valech” de \$189.552.-; y finalmente, el Sr. Navarro ha recibido la suma total de \$30.133.630.- y que mantiene, además, una pensión mensual denominada “Valech” de \$189.552.-

Reitera lo indicado en la contestación, y rechaza las argumentaciones de la actora realizadas en su escrito de réplica.

QUINTO: Que, para acreditar su acción, la parte demandante rindió la siguiente prueba:

Documental: Que, en el folio 37, acompañó: a) Informe de daño a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, respecto de Alejandro Antonio Yalef Aro, R.U.N. 7.496.414-1. por psicólogo del programa PRAIS, departamento de Salud Mental de Magallanes don Alejandro Darío Valle Soto a partir de evaluación de julio y agosto de 2021; b) Informe de daño a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, respecto de Teobaldo José Santana Vidal, R.U.N. 8.592.076-6 Emitido por el psicólogo del programa PRAIS, departamento de Salud Mental de Magallanes don Alejandro Darío Valle Soto; c) Informe de daño a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, respecto de Mario Enrique Navarro Gómez, R.U.N. 7.389.419-0. Emitido por psicólogo del programa PRAIS, departamento de Salud Mental de Magallanes don Alejandro Darío Valle Soto a partir de evaluación realizada en septiembre de 2021.

Que, en el folio 39, acompañó: 1.- Copia simple de Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas en la Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Valech II) -también conocida como Comisión Valech II- que contiene Listado para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura la nómina con los nuevos 30 casos reconocidos de desaparecidos y ejecutados y la lista con las 9.795 personas adicionales reconocidas como prisioneros políticos en donde yace víctima PPT número 864 Rene Orlando Balcazar Oyarzo, R.U.N. 8.422.356-5; víctima PPT número 9619 Alejandro Antonio Yalef Aros, R.U.N. 7.496.414- y víctima PPT número 8149 Teobaldo José Germán Santana Vidal, R.U.N. 8.592.076-6 <https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/600/nominappt.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, que contiene un total de 194 páginas escrituradas. 2., Copia simple de Informe Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWXZXFHWSSJ

Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Valech II)

<https://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/600/InformeValechII.pdf?sequence=5&isAllowed=y> , que contiene un total de 55 páginas escrituradas 3 Copia simple de Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, volumen I, tomo 1, emitido por la Corporación nacional de Reparación y reconciliación (mejor conocido como informe de Rettig). Descargado desde el sitio web <https://pdh.minjusticia.gob.cl/wpcontent/uploads/2015/12/tomo1.pdf>, que contiene un total de 460 páginas escrituradas. 4.- Copia simple de Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, volumen I, tomo 2, emitido por la Corporación nacional de Reparación y reconciliación (mejor conocido como informe de Rettig). Descargado desde el sitio web <https://pdh.minjusticia.gob.cl/wpcontent/uploads/2015/12/tomo2.pdf> , que contiene un total de 505 páginas escrituradas. 5.- Copia simple de Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, volumen II, tomo 3, emitido por la Corporación nacional de Reparación y reconciliación (mejor conocido como informe de Rettig). Descargado desde el sitio web <https://pdh.minjusticia.gob.cl/wpcontent/uploads/2015/12/tomo3.pdf>, que contiene un total de 422 páginas escrituradas.

Que, en el folio 40, acompañó: 1) Nota Diario La Prensa Austral del 20 de marzo de 1984; 2) Nota Diario La Prensa Austral 20 de marzo de 1984; 3) Portada Diario La Prensa Austral del 28 de marzo de 1984; 4) Portada del Diario La Prensa Austral de fecha 30 de Marzo de 1984; 5) Nota del Diario La Prensa Austral de fecha 30 de marzo de 1984; 6) Nota del Diario La Prensa Austral de fecha 30 de marzo de 1984; 7) Nota Diario La Prensa Austral 02 de Abril de 1984; 8) Portada Diario La Prensa Austral 03 de Abril de 1984; 9) Nota Diario La Prensa Austral 03 de Abril de 1984; 10) Nota Diario La Prensa Austral 11 de Abril de 1984; 11) Nota Diario La Prensa Austral 14 de Abril de 1984; 12) Nota Diario La Prensa Austral 17 de Abril de 1984; 13) Nota Diario La Prensa Austral 18 de Abril de 1984; 14) Nota del diario la Prensa Austral de fecha 19 de Abril de 1984 y 15) Portada del Diario la Prensa Austral de fecha 28 de Abril de 1984.

Que, en el folio 41, acompañó: Informe de Daño a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, respecto de la víctima de violación a los derechos humanos don Rene Orlando Balcázar Oyarzo, R.U.N. 8.422.356-5, emitido por PRAIS, psicólogo Alejandro Valle.

Que, en el folio 42, acompañó: 1. Certificado de Juan Felipe Vukusich Covacic; 2. Certificado de Carlos Alejandro Vera Vega; 3. Certificado de Alejandro Darío Valle Soto.

Que, en el folio 49, acompañó: Ficha de víctimas de violaciones a los derechos humanos de los archivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWXZXFHWSSJ

don René Balcázar Oyarzo, R.U.N. 8.422.356-5; 2.- don Mario Enrique Navarro Gómez, R.U.N. 7.389.419-0; 3. Y don Teodoro Santana Vidal, R.U.N. 8.592.076-6.

Que, en el folio 51, acompañó: Ficha de víctima de violaciones a los derechos humanos de los archivos del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto del siguiente demandante: a) Alejandro Antonio Yalef Aros, R.U.N. 7.496.414-1.

Testimonial: Que, en el folio 63, rindió la de don **Juan Felipe Vukusich Covacic**, quien señala que sabe por el relato de las personas, y porque son acreditados por la Comisión Valech, que investiga los casos de prisión política, y tortura durante la dictadura que los actores sufrieron detenciones injustificadas y maltrato por parte de agentes del Estado de Chile. Expresa estas detenciones injustificadas consistieron en personas que son privadas de libertad, por agentes del Estado, sin respetar los procesos debidos, y siendo detenidos por períodos importantes de tiempo, sin tener un proceso claro donde son detenidos sin una aparente justificación, son llevados a veces a una Comisaría o lugares no conocidos, reciben amenazas, insultos, las personas se encuentran en una total indefensión, y dado el contexto global de lo que ocurría en el país, las personas sienten temor de sufrir torturas e incluso la desaparición. Por tanto son horas de mucha incertidumbre y de mucho horror, que afectan a las personas de diferentes maneras, lo que puede producir y lo que ocurrió en los afectados, un trastorno por estrés post traumático, que se agravado por la continuidad de la detención y por la constante incertidumbre e indefensión en que se encuentran, reciben golpes, amenazas, escuchan gritos de otras personas supuestamente siendo torturadas, incluso, reciben golpes eléctricos en sus genitales, esto bajo la exigencia de declararse culpables de un delito que no cometieron. Indica que esto fue el año 1984, en relación a lo que se llamó el “punta arenazo”, y persistió el efecto de daño psicológico o moral, hasta el término de la dictadura, ya que se veían en la obligación de firmar, y por la condena no obtenían un trabajo calificado suficiente, lo que también afectaba a sus familias y el posible trabajo de sus familiares.

En relación al reconocimiento del Estado de Chile de las situaciones descritas respecto de los actores, dice que hubo varios elementos que comenzaron a estudiarse e investigarse, desde que asume el presidente Aylwin, quien señala en su discurso la tan comentada frase “que habrá reparación en la medida de lo posible”. De donde surge la comisión Rettig, la atención del PRAIS, y se reconoce el exilio y se establecen algunas medidas de tipo reparatorias, y en este caso específico, la Comisión de Prisión Política y Tortura, denominada Comisión Valech.

En cuanto al daño moral de los actores, señala que estos en diversos momentos de su vida, sufrieron cambios en sus proyectos de vida, dificultades importantes para obtener trabajo estados de ansiedad importantes, trastornos del sueño, recuerdos terroríficos de la situación vivida, el temor permanente a que la situación vuelva a ocurrir, por ejemplo cuando es el “tacazo” o el tema de los



cheques del hijo de Pinochet, cuando fue la detención de Pinochet en Londres, y a pesar de los años que han pasado, durante el tiempo del llamado “estallido social” y el despliegue de militares, tanquetas y armamento de guerra, genera nuevamente un intenso temor a revivir lo vivido. Una de las cosas más importantes que sufrieron, la violación de sus derechos humanos, fue el hecho de la negación y el ocultamiento que se fue develando lentamente y que aún a pesar de los años, sigue insistiendo un nivel de impunidad, siguen existiendo detenidos desaparecidos, siguen existiendo niños que nacieron en cautiverio y que no se sabe dónde están. Aunque alguno de estos hechos no afectan directamente a los involucrados, sí son parte de su percepción de la realidad y la evidencia de lo vivido.

Que, en el folio 64, rindió la de don **Carlos Antonio Peña Ruiz**, quien señala que es efectivo que los actores sufrieron detenciones injustificadas y maltrato por parte de agentes del Estado de Chile, el 27 de marzo de 1984, había una protesta, y bajaron los de Fuerzas especiales de Carabineros, que andaban en un bus. Y de ahí los subieron al bus, y de ahí les colocaron las cabezas debajo de los asientos, y con los fusiles, les pegaban con la punta de los fusiles y las culatas, en los riñones. Y les hicieron firmar un papel que si no, los iban a matar. Y de ahí los llevaron a la Comisaría, de Waldo Seguel, y ahí había un pasillo que entraba al gimnasio, había 10 Carabineros por lado derecho e izquierdo, y cuando ellos pasaban, el que más le podía pegar patadas, le pegaba patadas, y de ahí en el gimnasio los metieron de rodillas y con las manos hacia arriba, hacia el cielo raso, y si bajaba el pote, le daban una cargada de patadas, y le colocaban la mano en la pared y si se agachaban, también le pegaban una patada en el pote, de ahí los metieron a la celda, y ahí había 90 presos en la celda, que no se podía respirar. Después los sacaron de vuelta al gimnasio, les colocaron monedas atrás, en el bolsillo del pote, la mano en la pared y les pegaban con una varilla de acero, para que no quedaran marcados les colocaban esas monedas en el pote. De ahí los volvieron a meter a la celda, otra vez. Ahí se quedaron los noventa dentro de la celda, y al otro día los pasaron a la cárcel. Y en la cárcel había un pasillo, que está por Fagnano, y ahí estuvieron todo el día tirados en el piso, sin comer en todo el día. De ahí, los hicieron dormir con los "rematados" en las celdas, y mientras que estaban presos, los rematados los amenazaban de que los querían violar, ahí se estuvo preso por 25 días, y ahí los dejaron libres. Cuando fueron a su trabajo, no los recibieron, porque estaban los papeles "manchados". Y sin poder dar comida a su gente. Ahí se estuvo firmando años, en la Fiscalía Militar, que estaba en Ojo Bueno, y todos quedaron psicológicamente jodidos.

Que, en el folio 66, rindió de don **Víctor Alejandrino Muñoz Torres**, quien señala que es efectivo que los actores sufrieron detenciones injustificadas y maltrato por parte de agentes del Estado de Chile, el 27 de marzo de 1984, en una de las tantas protestas que hubo en contra de los Derechos Humanos, pacíficamente, llega



un bus de Fuerzas especiales, ingresando a varios protestantes que al subir al bus fueron golpeados con pies, puños y culatas del arma, fusil, adentro de este bus había entre 10 y 12 Carabineros de Fuerzas especiales, y al ir ingresando los detenidos, los iban golpeando nuevamente con golpes de puño, patadas y arma de servicio, fueron puestos de rodillas, con los brazos en alto, siempre custodiados por Carabineros de Fuerzas especiales de Carabineros. Posterior a eso fueron llevados a la Comisaría, ubicada en Waldo Seguel, y fueron ingresados, dándoles el mismo procedimiento, o sea golpes de pie y puño y con el arma de servicio. Adentro, en el calabozo, había un hacinamiento increíble, tanto que no podían respirar, pues estaban todos muy juntos. Hay que gente que se desmayó igual. Y llegó un suboficial con unos papales que les hicieron firmar, para darse la culpa solos, para que al firmar esos papeles confesaban haber cometido delitos, que nunca habían cometido. Los hicieron firmar un papel. Después los ingresaron a la Cárcel pública, también ubicada en Waldo Seguel, ahí los hicieron ingresar junto con los rematados, que eran un peligro para la sociedad. Mientras tanto los abogados, trabajaron para poder sacar a los colegas y amigos. Pasaron 25 días que estuvieron presos. Desde ahí, los amigos nunca más pudieron tener un trabajo estable, por tener los papeles manchados. Algunos ya no se encuentran acá, y se radicaron en otras ciudades, al no poder encontrar trabajo en Magallanes. También fueron marcados psicológicamente. Indica que lo anterior le consta porque él también estuvo en la protesta, y vio como sus colegas iban ingresando. Y vio los hechos ya mencionados. Él también fue detenido, otro día eso sí.

Que, en el mismo folio rindió la de don **Claudio René Toro Eugenio**, quien indica que las detenciones injustificadas a los actores y maltrato por parte de agentes del Estado de Chile, ocurrió en marzo de 1984. Fueron detenidos e ingresados a un bus de Carabineros, donde fueron golpeados brutalmente, con patadas, puños y fusil igual. De ahí los llevaron a la Primera Comisaría de Carabineros, donde fueron bajados, y golpeados en la entrada de Carabineros, se ponían por lado y lado, formando un callejón, y les iban golpeando por ambos lados, mientras pasaban. Después en la noche son ingresados a las celdas, donde había más de 60 personas, y las celdas era de 3x3 metros. aproximadamente, en donde no se podía respirar ni moverse, no los dejaban salir al baño ni nada, había que hacer adentro sus necesidades. Después, al otro día, son llevados a la Fiscalía Militar, a donde los obligaron a decir que ellos habían tirado piedras y eso, siendo que era falso. Después son trasladados de vuelta a la Comisaría, y de ahí son enviados a la Cárcel pública, donde los ubican en celdas que son para dos personas, pero los pusieron de a ocho en cada celda. En la noche los sacaban de las celdas, para hacerles preguntas, agentes civiles de la CNI, preguntando que digan la verdad sobre lo que habían hecho, y ellos nunca hicieron nada. Y eran golpeados, con golpes de puño, patadas en la espalda, cuerpo, y de ahí los regresaban de vuelta a la Cárcel. De ahí mientras



estuvieron en las celdas, sufrieron hacinamiento, prácticamente dormían parados. Estuvieron más o menos como 30 días detenidos. Después que los dejaron libres, después de esos treinta tantos días, fueron perseguidos él y su familia. Después les metían panfletos en las casas, llegaban a echarles miedo a las familias de ellos. Y de ahí estuvo firmando en la fiscalía como 4 años. Y ahora en estos momentos, él todavía no olvida lo que le pasó, cree o siente que lo persiguen, y siempre le ha dicho que eso se le quedó en la memoria, con daño, y que ya no se va a recuperar. Dice que le consta dado que lo conoció cuando él también fue detenido, en la misma fecha y llevado a la Cárcel pública. Todo lo que contó, yo lo vivió con él, o sea pasaron lo mismo.

Explica que se refiere a varias personas, no sólo él no más, fueron hartas personas las que fueron detenidas esa vez, no recuerda todos los apellidos, pero sí a Pacheco, Santana, Yalet, Balcázar, y tantos otros que no recuerda mucho, pero eso fue más o menos.

SEXTO: Que la demandada rindió la siguiente prueba:

Documental: Que, en el folio 53, acompañó: Oficio del Jefe (S) de departamento Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, de fecha 9 de noviembre de 2020.

SÉPTIMO: Que, de la prueba instrumental, no objetada y detallada en los considerandos precedentes, resulta posible constituir indicios graves, precisos y concordantes entre sí, en los términos de los artículos 1712 del Código Civil y 426 del Código de Procedimiento del ramo, para construir, mediante un proceso lógico deductivo, una presunción judicial con mérito probatorio suficiente para los efectos de establecer como hechos de la causa, los que a su vez, no fueron discutidos por la demandada, los siguientes:

1.- Que, don Teobaldo José Germán Santana Vidal, René Orlando Balcázar Oyarzo, Alejandro Antonio Yalef Aro, y Mario Enrique Navarro Gómez, fueron sujeto de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, todo constitutivo de un ilícito, para lo que nos convoca, de carácter civil, consistente en su núcleo, en lo que el propio Estado ha reconocido, a través de los procesos de reparación estatal, los cuales fueron perpetrados al menos y concretamente, en la ciudad de Punta Arenas, desde el 27 de marzo de 1984 y días posteriores.

2.- Que, don René Orlando Balcázar Oyarzo, don Alejandro Antonio Yalef Aros y don Teobaldo José Germán Santana Vidal, se encuentran dentro de la nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura de la Comisión Valech II, bajo los números 864, 9619 y 8149. Y en relación a Mario Enrique Navarro Gómez, bajo el número 1618.

3.- Que, según documento de folio 53, los demandantes en su calidad de víctimas de Prisión Política y Tortura, como beneficio de reparación legal, a noviembre de 2020, recibieron:



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWXZXFHWSSJ

- Teobaldo Santana Vidal: \$19.684.528, mediante el Instituto de Previsión Social, con una pensión mensual de \$189.552 a esa fecha.

- René Balcazar Oyarzo: \$19.684.528, mediante el Instituto de Previsión Social, con una pensión mensual de \$189.552 a esa fecha.

- Alejandro Yalef AroS: \$19.684.528, mediante el Instituto de Previsión Social, con una pensión mensual de \$189.552 a esa fecha.

- Mario Navarro Gómez: \$30.133.630, mediante el Instituto de Previsión Social, con una pensión mensual de \$189.552 a esa fecha.

OCTAVO: Que, conforme la interlocutoria de prueba, se advierte que se requirió acreditar el punto 3 de dicha resolución, que consistía en la “Efectividad que los actores, a consecuencia de los referidos hechos, sufrieron daño moral.” Que, conforme los pensamientos modernos del Derecho Probatorio, precisamente este daño debe ser probado.

De modo que el daño moral es un hecho que se somete a las mismas reglas probatorias que el daño material, sin embargo, dada su especial naturaleza, no es necesaria ni esperable una prueba directa. De esta forma la carga se levanta con algún elemento de convicción, aunque sea periférico, capaz de servir de inferencia para el establecimiento del daño moral.

Al efecto, consta declaración de estrados, de Juan Felipe Vukosich Covacic, quien expone al punto 3 del interlocutoria de prueba, entre otros aspectos: que “ los actores, en diversos momentos de su vida, sufrieron cambios en sus proyectos de vida, dificultades importantes para obtener trabajos, estados de ansiedad importantes, trastornos del sueño, recuerdos terroríficos de la situación vivida, el temor permanente a que la situación vuelva a ocurrir...” que unidos la documental de folios 37 y 41, informes de daños a consecuencia de prisión política, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, de todos y cada uno de los demandantes, emitidos por profesionales del PRAIS, dan cuenta de las secuelas psicológicas y emocionales que la violación de la dictadura militar a los derechos humanos provocó e Informa en términos generales sobre las secuelas dejadas en el Plano de Salud Mental relacionadas. Estos agregados al proceso como instrumentos privados emanado por terceros ajenos al juicio que, al no ser reconocido por quien lo suscribe, carece por sí solo de valor probatorio como instrumento.

No obstante, con la testimonial aludida, cuya veracidad concuerda con el hecho que no hay prueba en contrario y demás antecedentes acompañados en el proceso, en especial la certificación de calidad de víctimas elaborado por la Comisión Valech, y validadas por el INDH, así como, el Oficio de Instituto de Previsión Social de Folio N°53, constituyen presunción judicial, con características de grave, precisa y concordante, de acuerdo a artículo N°384 del Código de Procedimiento Civil, para efectos de presumir , en virtud de su gravedad y precisión suficiente.



Sin perjuicio de lo ya referido, el mismo daño, se desprende de la naturaleza de la agresión de la cual padecieron, en manos de agentes del Estado, desde su privación de libertad, golpes, malos tratos e interrogatorios, con uso desmedido de la fuerza, y prácticas fuera del derecho, hasta la consecuencia directa que implicó afectación en contexto personal, social y familiar, debiendo considerarse en este sentido su reconocimiento por parte del Estado como víctimas, así como las reparaciones que, si bien no permiten ser entendidas como íntegras, sí complementan el ejercicio de la acción que se pretende en estos autos, al morigerar las consecuencias perniciosas del ilícito, al estar fundada en los mismos hechos, consolidando la causalidad que exige el resarcimiento demandado.

NOVENO: Que, cabe señalar que los documentos incorporados al proceso dan cuenta de lo ya establecido, así como, los detalles de los momentos vividos en cada uno en la cárcel pública de Punta Arenas, además las sutilezas que dan la especial particularidad de esta causa, y de las fortalezas que los actores desarrollaron para afrontar todo el proceso de reelaboración en las consecuencias devenidas, como lo consignan los respectivos informes de daños de folio, 37 y 41.

DÉCIMO: En efecto, tal como lo afirma el demandado, se han efectuado por el Estado chileno múltiples esfuerzos, una vez finalizado el régimen autoritario, de compensación a todos aquellos víctimas de violaciones de derechos humanos o a sus familiares directos por episodios ocurridos durante el período de la Dictadura Militar que gobernó nuestro país, que ha sido fijado por ley entre los años 1973 y 1990.

Amparados en esta lógica, es que se dictó la Ley N° 19.123, de 8 de febrero de 1992, que crea la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, y que establece una pensión mensual de reparación, en beneficio de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política (artículo 17), pensión que tiene fijada por ley el monto y los beneficiarios, los que por lo demás son desagregados según sea la vinculación que tengan con la víctima y su edad, instituyendo beneficios médicos (artículo 28) y educacionales (artículos 29; 30; y, 31), entre otros.

Normativa a la que se agregó la Ley 19.234 de 1993, que establece beneficios previsionales por gracia para personas exoneradas por motivos políticos en lapso que indica y autoriza al Instituto de Normalización Previsional para transigir extrajudicialmente con relación a la jubilación de éstos en los casos que señala; la que dispuso en su artículo 8 en relación con su artículo 3, que son exonerados políticos los que hayan sido despedidos por causas que se hubieran motivado en consideraciones de orden político y que consten de algún modo fehaciente, tales como el hecho de figuración del exonerado en decretos, bandos, oficios, o resoluciones, o en listas elaboradas por alguna autoridad civil o militar, como activista político o como miembro de partidos políticos proscritos o declarados en receso, que



hubieran sido privados de libertad, en cualquier forma, fuere en calidad de prisioneros, retenidos, detenidos, relegados o presos, en cárceles, prisiones, regimientos, lugares especialmente habilitados al efecto, o en su propio domicilio, sea que estos resulten ser coetáneos, o inmediatamente anteriores o posteriores a la exoneración, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Esta fue modificada por la Ley 19.582 y la Ley 19.881 estableció un plazo para acogerse a los beneficios allí concebidos.

Asimismo, en el marco del reconocimiento de violaciones de derechos humanos en Chile por parte de agentes del Estado durante la Dictadura Militar, se dictó la Ley 19.980 de noviembre de 2004, ampliando los beneficiarios y beneficios de leyes precedentes; y la Ley 19.992 de diciembre de 2004, que estableció beneficios de carácter médico y educacional y una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los derechos humanos individualizadas en el anexo “Listado de prisioneros políticos y torturados”, de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por el decreto supremo N°1.040 de 2003 del Ministerio del Interior, así como su incompatibilidad con aquellas otorgadas en las leyes N° 19.234, 19.582 y 19.881, otorgando a estas personas la opción y a quienes la ejerzan el derecho a un bono. La ley 20.134 que concedió un bono extraordinario a los ex trabajadores del sector privado y de las empresas autónomas del Estado, exonerados por motivos políticos en período que indica a quienes se les concedió pensión no contributiva conforme al inciso tercero del artículo 12 de la ley N° 19.234.

Tal normativa interna tiene prístina vinculación con lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en que los Estados Americanos signatarios, entre otros, reconocen un listado de derechos que estiman consubstanciales a la persona humana. En el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigente en Chile desde el año 1989.

Que, las leyes precedentemente señaladas, denominadas leyes de reparación; si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de derechos humanos o a sus familiares directos, estima este sentenciador que en modo alguno impide acceder ni es incompatible, con el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política civil ofensiva, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta, instando por la reparación efectiva de todo daño sufrido.



En efecto, la legislación nacional especial que aduce el Fisco y que, conforme al análisis de las características de los beneficios que involucran sólo introduce un régimen de reparaciones asistenciales generales, no contiene en sus textos incompatibilidad alguna con las indemnizaciones que aquí se persiguen, y no es procedente suponer que se dictaron para reparar todo daño moral inferido a las víctimas de atentados a los derechos humanos, ya que se trata, como se dijo, de formas distintas de reparación, y el que las asuma el Estado voluntariamente en su totalidad, no importa la renuncia de una de las partes o la prohibición para que el sistema jurisdiccional declare su procedencia, por los medios que franquea la ley.

En cuanto a la tesis sostenida en la defensa fiscal, respecto el plan de reparación estatal que implica la necesidad de rechazar in limine las demandas que las víctimas puedan ejercer ante tribunales, no resultan suficientes, pues de acoger a tramitación las mismas no desincentiva los planes estatales, toda vez que es precisamente la legitimidad del control judicial la que permite resguardar los derechos fundamentales, de nuevo vinculado al acceso a la justicia en su amplia dimensión, así como controlar la integridad de las reparaciones y reafirma los derechos fundamentales como límite o barrera frente a lo que alguna vez –y particularmente desde 1973 a 1984, a lo menos- pudo construir un fin estatal.

En este orden de cosas, si bien no se puede tener las indemnizaciones otorgadas por ley a los demandantes como suficientes para una excepción de indemnización satisfactiva, lo cierto es que consta en la ya pre-citada Ley, las prestaciones a las que se dio acceso, las que en términos generales pueden constituir una buena señal en cuanto a que nuestro Estado pretende por tal vía reparar en parte el mal causado, y por otra, ofrecer garantías de no repetición, pero que indudablemente no alcanzan a dar por cumplida la obligación del Estado de reparación integral a la víctimas, reparación que por cierto fluye como simbólica y más aún, compatible pues el plan de vida de los actores ya se ha transformado y sólo corresponde en esta instancia, la estimación de un monto que pueda considerarse como necesario para alcanzar los objetivos que pueda lograr una indemnización por daño moral, y de esta manera, se rechazara la demanda en esta parte y las mismas serán consideradas para efectos de la regulación como se indicará.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en relación a la excepción subsidiaria de prescripción, como ya se indicó en las consideraciones previas de esta sentencia, se reproducen los argumentos esgrimidos y se remite a ellos, sin perjuicio de enfatizar que no resulta aplicable esta institución de carácter civil, para efectos de denegar el acceso a la justicia y la reparación integral a las víctimas de derechos humanos, es decir, a la víctima como los que se han establecido en esta sentencia, y que han sido perpetrados por agentes del Estado, de manera sistemática y fuera del derecho, conforme lo ha ya resuelto la doctrina, pero especialmente los Tribunales Superiores de Justicia, así como la Corte IDH, institución que cede ante las normas de ius



cogens, normas de derecho internacional que mandatan al estado a responder como parte del principio democrático de derecho.

En efecto, en similares casos atendida la especial naturaleza del ilícito cometido, el Máximo Tribunal ha venido sustentando una línea de razonamiento que este sentenciador comparte (roles 1424-2013, 11208-2015, 13170-2015, 17015-2015, 37993-2015), la cual enfatiza que tratándose de un delito de lesa humanidad en que la acción penal persecutoria es imprescriptible, no parece coherente entender que la acción civil indemnizatoria quede sujeta a las normas sobre prescripción consagradas en la ley civil interna, ya que ello contraría la preceptiva internacional sobre Derechos Humanos integrante del ordenamiento jurídico nacional en virtud del artículo 5° de la Carta Fundamental, que introduce el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos como consecuencia del acto ilícito, y se opone incluso a lo establecido por el propio derecho interno que en virtud de la Ley n°19.123, reconoció la existencia de los daños y concedió beneficios de índole pecuniario también a los familiares de aquellas víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, registrados en los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Por consiguiente -se afirma- cualquier supuesta diferenciación entre ambas acciones y otorgamiento de un tratamiento desigual es discriminatorio y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama.

Estriba lo anterior, la improcedencia de aplicar normas del Código Civil como derecho común supletorio a la responsabilidad derivada de crímenes como el de autos, posible de cometer con la activa colaboración del Estado, por cuanto dichas normas atienden a postulados y finalidades distintas a aquellas que emanan del Derecho Internacional, de manera que deberá integrarse la normativa con los principios generales del derecho respectivo, que reconocen la imprescriptibilidad de las acciones reparatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos.

DÉCIMO SEGUNDO: A mayor abundamiento, conviene tener presente que la acción deducida encuentra su fundamento en los principios generales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y su consagración normativa en los tratados internacionales ratificados por Chile que consagran el derecho a la reparación íntegra, los que el Estado está obligado a reconocer y proteger con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5° inciso segundo y 6° de la Carta Fundamental.

En esta línea argumentativa, la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 1.1 y 63.1) sujeta la responsabilidad del Estado por esta clase de ilícitos (violaciones de derechos humanos) a reglas de Derecho Internacional, las que no pueden ser incumplidas a pretexto de hacer primar otros preceptos de derecho interno, acatando de este modo la Convención de Viena sobre Derecho de los



Tratados (artículo 27). Esta preceptiva de rango superior impone un límite y un deber de actuación a los poderes públicos y en especial a los tribunales nacionales, en tanto no pueden interpretar las reglas de derecho interno de un modo tal que deje sin aplicación los preceptos de Derecho Internacional que consagran el derecho a la reparación íntegra del daño, pues ello podría comprometer la responsabilidad internacional del Estado de Chile.

Conforme se viene razonando, no resultan atingentes las disposiciones del Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles comunes de indemnización de perjuicios que contradicen la normativa internacional en cuanto a disponer la ineficacia de normas internas que hagan ilusorio el derecho a la reparación de los daños ocasionados por crímenes de lesa humanidad cometidos por los agentes del Estado de Chile.

DÉCIMO TERCERO: Finalmente debe tenerse en consideración que el sistema de responsabilidad del Estado deriva también del artículo 6° de la Constitución Política de la República y 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, normas que -de acogerse la tesis del Fisco de Chile- quedarían sin aplicación.

La primera disposición, somete la acción de los órganos del Estado a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, declara la fuerza vinculante de los preceptos de la Constitución para sus titulares o integrantes como para toda persona, institución o grupo, y dispone que la infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. La segunda, establece que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad.

DÉCIMO CUARTO: Atendido lo anterior, en lo precedente, corresponde rechazar la excepción de prescripción de las acciones civiles que se ejercitan en autos por aplicación de la preceptiva contenida en el Código Civil, por ser contrario a las reglas de Derecho Internacional a que queda sujeta la responsabilidad del Estado por la clase de ilícitos que se analizan.

DÉCIMO QUINTO: En definitiva, quedaron acreditados en el caso sub júdice los hechos dañinos en que se funda la demanda, constituido por el actuar delictual en que han incurrido agentes del Estado de Chile.

Los perjuicios de índole moral, que a consecuencia de ello ha devenido en quienes han accionado civilmente, quedan -a su vez- suficientemente asentados en razón los considerandos séptimo, octavo y noveno del fallo

Con todo, es dable afirmar que los hechos en que incurrieron los agentes del Estado implican lesión a derechos extra patrimoniales de gran valor, entre los cuales



aparece el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas, derechos que se encuentran cautelados constitucionalmente.

DÉCIMO SEXTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes y la entidad del daño moral sufrido, como también sus consecuencias psíquicas, familiares y sociales en los actores, y -por cierto- su persistencia en el tiempo, que de acuerdo a lo expresado tanto por los demandantes, como por la parte demandada, no es posible ceñirse a criterios concretos y específicos que vayan unidos a una determinada cantidad de dinero, y que esta cantidad, pueda efectivamente resarcir las consecuencias perniciosas del ilícito, es que corresponde acceder a la pretensión indemnizatoria de autos, fijándose prudencialmente su monto en la suma de \$40.000.000 (cuarenta millones de pesos) para don Teobaldo José Germán Santana Vidal, don Rene Orlando Balcázar Oyarzo, don Alejandro Antonio Yalef Aros, y don Mario Enrique Navarro Gómez.

En cuanto a la solicitud subsidiaria del Fisco de considerar para la regulación del daño, los pagos ya recibidos del estado, no puede ser atendida, por las mismas argumentaciones referidas en el considerando décimo de esta sentencia.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, la restante prueba anotada en el motivo quinto y sexto de esta sentencia, en lo no considerado, en nada altera lo que se ha venido razonando y sólo se menciona para los fines procesales pertinentes.

DÉCIMO OCTAVO: Que, en relación a las costas, considerando que la parte demandada no ha sido totalmente vencida, así como la naturaleza de la acción, y las acciones previas que ha desplegado el Estado para satisfacción de las víctimas, se eximirá del pago de las costas.

DÉCIMO NOVENO: Para efectos de reajustes e intereses y concretar el principio de la integridad de la reparación del daño, las sumas que se condena pagar a los demandados, por concepto de indemnización por daño moral, se reajustarán en la misma proporción en que varíe positivamente el Índice de Precios al Consumidor desde el mes anterior a la época en que la sentencia definitiva quede ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, más los intereses corrientes para operaciones reajustables, desde la época de la mora hasta el pago efectivo.

VIGÉSIMO: Que incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta.

Por estas consideraciones, y teniendo presente el derecho internacional de los derechos humanos; las Convenciones Internacionales sobre la materia, ratificadas por Chile y que se encuentran vigentes; la Constitución Política de la Republica; nuestro Código Civil; Código de Procedimiento Civil, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley N° 19.992; y demás normas pertinentes, SE DECLARA:

I. Que se rechazan las excepciones de pago íntegro y prescripción opuestas por el Fisco de Chile.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWXZXFHWSSJ

II. Que, se acoge la demanda deducida, sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a los demandantes, **Teobaldo José Germán Santana Vidal**, Cédula de Identidad N° 8.592.076-6, **René Orlando Balcázar Oyarzo**, Cédula de Identidad N° 9.998.159-8, **Alejandro Antonio Yalef Aros**, Cédula de Identidad N° 7.496.414-1 y don **Mario Enrique Navarro Gómez**, de Identidad N° 7.389.419-0, a título de indemnización por daño moral, **la suma de \$40.000.000(cuarenta millones de pesos), a cada uno**, más los reajustes e intereses desde que la sentencia queda firme.

III. Que no se condena en costas al demandado, por no haber sido totalmente vencido.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol C-1814-2020.

DICTADA POR DON CÉSAR MILLANAO ANDAUR, JUEZ SUBROGANTE DEL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE PUNTA ARENAS.

Certifico: que con esta fecha se dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 162 del Código de Procedimiento Civil. Punta Arenas, 20 de mayo de 2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XWXZXFHWSSJ